

EDITORIAL*

En un apartado, WILLIAM OSPINA indica que Colombia es una suerte de rompecabezas, en el cual los mapas muestran apenas una parte de la realidad, un aspecto de las cosas que existen. El sector rural no escapa a esta descripción, ya que la visión que se tiene de él es acotada, e ignora las dinámicas de transformación del campo. La ruralidad en Colombia es mucho más amplia de lo que tradicionalmente se ha considerado, según el último informe del PNUD *“Colombia rural: razones para la esperanza”*

“...en las tres cuartas partes de los municipios, cuya área ocupa la mayoría del territorio nacional, predominan relaciones propias de sociedades rurales” (Resumen Ejecutivo, p. 8).

El mundo rural es altamente vulnerable y se enfrenta a varias problemáticas. Entre ellas se destacan el conflicto armado que inicia en los años cincuenta con la denominada “violencia” y cuyos actores e intereses han ido cambiando y evolucionando, alentado por factores como el narcotráfico y la minería; la falta de legitimidad y credibilidad de las organiza-

ciones sociales del campesinado que afectan el ejercicio de la democracia; la falta de instrumentos y mecanismos por parte del Estado para atender los problemas del sector, y el olvido por parte de la sociedad civil, que permaneció callada ante la contrarreforma agraria de los paramilitares.

Estos elementos tienen como consecuencia que en el campo se observe un índice de concentración de la propiedad rural del 0,86, lo que indica que Colombia es uno de los países más desiguales en la distribución de la tierra; unos altos niveles de pobreza, que para el año 2010 alcanzan el 64%; unas condiciones de ingreso que tienen una diferencia del 20% sobre el promedio de lo que reciben los pobladores urbanos; poca claridad en los derechos de propiedad, con el 40% de los predios que no tienen un título; utilización ineficiente de los recursos, pues el 35% de la tierra abierta es utilizada en la gran ganadería y menos del 5% en la agricultura; el desplazamiento forzado afecta alrededor de 5,2 millones de personas, lo que constituye un drama humanitario; poca formación de capital humano y poca tecnificación, y pocos mecanismos de participación.

* El comité editorial agradece los comentarios y ayuda de MAURICIO LEÓN, estudiante de IX semestre de Economía en la Universidad Externado de Colombia.

En la historia de Colombia se han destacado diversos modelos de desarrollo implementados desde principios del siglo XX, cuyo objetivo era darle relevancia al sector agrícola. Desde el modelo de sustitución de importaciones, pasando por el modelo de libre mercado, observamos que el objetivo ha sido mejorar la eficiencia y la producción de cultivos agrarios. Sin embargo, en los últimos 20 años estos dos objetivos no se han cumplido: el campo sigue siendo ineficiente y las exportaciones de nuestros alimentos al exterior han caído abruptamente, disminuyendo las exportaciones de productos agrícolas en un 17% para el año 2009.

En los cultivos transitorios, los cuales son los más cultivados por los campesinos colombianos, como el maíz, el arroz y la papa, según datos del Ministerio de Agricultura, el 55% de la producción se realiza de manera tradicional, subrayando la poca tecnificación del país, que no ha podido ser mejorada por las políticas agrarias de los últimos años. Se calcula que en Colombia hay una inmensa llanura que arranca en Puerto López (Meta), se extiende por más de seis millones de hectáreas entre los departamentos de Vichada y Meta, denominada la altillanura, es plana y fácilmente mecanizable, por lo cual la llaman la nueva frontera agrícola colombiana. Sin embargo, seguimos importando 179.293 toneladas de granos, como arroz, frijón y lenteja, 1.421.719 to-

neladas de trigo y 3,5 millones de toneladas de maíz. El campo tiene un gran potencial de recursos productivos, la tierra no es utilizada eficientemente y se enfrenta a conflictos por el uso de la tierra con la ganadería extensiva y la minería; la ganadería extensiva utiliza 39 millones de hectáreas mientras su potencial productivo no es superior a las 20 millones de hectáreas, sobrándole alrededor de 15 millones, que se deberían utilizar para la agricultura o actividades de reforestación.

En los últimos 40 años el sector se ha visto inmerso en un ciclo recurrente de despojo y victimización. La duración y el calibre del conflicto armado interno en Colombia han generado un rezago económico fuerte, evidenciado en el campo, que no solo deprime comercialmente a los pueblos, sino que además provoca migraciones a la ciudad que en últimas desestiman la producción agrícola del país y condena a la pobreza a los campesinos sin tierra. En las zonas rurales se han desarrollado procesos electorales fraudulentos y lazos clientelistas entre las elites y el electorado; los líderes de los movimientos de campesinos han sido amenazados y en la mayoría de los casos, asesinados. El campesinado ha perdido toda legitimidad y representación dentro del sistema político por el uso indiscriminado de la violencia y la estigmatización en contra de los líderes y los pocos mecanismos y herra-

mientas para lograr objetivos comunes; el campesino no tiene libertad de opinión ni los mecanismos para que sus demandas, como población marginada, sean escuchadas y atendidas.

El Estado está debilitado: el Ministerio de Agricultura y sus instituciones no tienen la capacidad ni los instrumentos para atender los problemas rurales. Los habitantes del campo tienen bajos niveles de educación y de cobertura en salud, que se reflejan en un índice de necesidades básicas insatisfechas (NBI) del 85%, índice que permite identificar las carencias críticas y caracterizar la pobreza; acrecentando cada vez más la brecha entre ciudad y campo. Según los datos reportados por la Misión para el Empleo de las Series de Empleo, Pobreza y Desigualdad (MESEP), la pobreza en el sector rural es del 64,5% y la indigencia del 29,1%, mientras en las ciudades es del 30,6% y 7,1% respectivamente, subrayando las diferencias en el nivel de vida de los pobladores de la urbe con respecto a los del campo.

La concentración de la tierra, vista como el foco histórico del conflicto, nos hace pensar en la necesidad apremiante de generar espacios que reivindicquen la deuda histórica por tantos siglos de indiferencia con el campo

colombiano; el eje fundamental a tratar debe ser la distribución equitativa y eficiente de la tierra y del ingreso. Las soluciones del gobierno nacional apenas empiezan a garantizar la seguridad para que los campesinos se sientan tranquilos en sus tierras, pero todavía quedan pendientes años de abandono estatal, que se deben compensar. El conflicto aún se respira en el campo colombiano, en los pueblos se percibe el olor a pólvora, y el miedo hace pensar que las garantías que el Estado ha puesto se quedan cortas con el tamaño del problema.

El comité editorial de la *Revista Divergencia*, de esta manera, resalta la importancia de generar un modelo más incluyente, en el que el sector rural juegue un rol determinante en el desarrollo del país; podría considerarse casi una paradoja la existencia de un plan de desarrollo incluyente que no tenga en cuenta el desarrollo del campo. Tal como lo indica Absalón Machado:

“el Estado solo no puede resolver el conflicto agrario, necesita de la sociedad civil”.

Así pues, la sociedad civil y, sobre todo, la academia deben acompañar al Estado en la resolución de los conflictos del sector rural colombiano.